



Gestión de la riqueza petrolera

La economía política de los países exportadores de petróleo: Por qué a algunos les ha ido tan mal

Benn Eifert, Alan Gelb y Nils Borje Tallroth

LA EVOLUCIÓN económica de los países exportadores de minerales ha sido en general desalentadora. En las últimas décadas a los exportadores de petróleo les ha ido mucho peor que a los países de escasos recursos, sobre todo considerando el gran volumen de ingresos generados por esta fuente de energía desde 1973, cuando se dispararon los precios del crudo. Quizás ello se deba a la forma en que se administran las economías petroleras. La buena gestión de los ingresos petroleros se parece mucho a la de cualquier presupuesto, pero ciertos aspectos son más importantes en el caso de los exportadores, por ejemplo, cuánto ahorrar para las generaciones futuras, cómo estabilizar la economía en un clima de incertidumbre y fluctuaciones de los ingresos y evitar ciclos de auge y caída, y cómo cerciorarse de que el gasto se asigne eficientemente, ya sea a proyectos importantes de inversión, consumo público o subvenciones.

En teoría, la receta para abordar estas cuestiones es bastante sencilla, pero suele chocar

con la realidad de sistemas en los que no existe el equilibrio de poderes necesario para garantizar el buen uso de los recursos y brindar la flexibilidad fiscal que permita modificar el gasto en función de cómo varíen los recursos. En los casos extremos en que un gobierno se mantenga en el poder gracias a los recursos generados por el petróleo, el único ajuste fiscal posible será el provocado por una crisis. En este artículo se comparan la economía política del régimen fiscal y la gestión económica en países exportadores de petróleo con sistemas políticos muy diferentes, se identifican los factores que han ayudado a administrar los recursos generados por el petróleo y se extraen algunas conclusiones.

La óptica de la ciencia política

Así como las tradiciones políticas determinan el uso de los ingresos provenientes del petróleo, son los propios ingresos los que determinan la economía política de los países exportadores de petróleo. Los flujos derivados del “oro negro” pueden financiar la inversión

productiva de índole física o social, o propiciar auges insostenibles del consumo y precipitar, en última instancia, una crisis fiscal; pueden elevar los niveles de bienestar público a través de mecanismos transparentes de distribución, crear espacios excepcionales para competir, o apuntalar cleptocracias. La ciencia política revela aspectos del funcionamiento del Estado que repercuten en la gestión económica y fiscal de los países exportadores de petróleo. La teoría de la búsqueda de renta económica (recuadro 1) demuestra cómo ésta desvía los incentivos económicos hacia la competencia por el acceso a los ingresos petroleros, alejándolos de las actividades productivas, especialmente en entornos no transparentes caracterizados por la arbitrariedad política y la ambigüedad en materia de derechos de propiedad. Estos y otros estudios pueden ayudar a crear un marco analítico que permita entender con más claridad y mejorar la gestión fiscal y económica en los países exportadores de petróleo.

La ciencia política permite agrupar a los países exportadores de petróleo en cinco categorías básicas: democracias maduras, democracias partidistas, autocracias paternalistas, autocracias depredadoras y autocracias reformistas. Estas categorías —extraídas de varios estudios sobre el tema (véase el cuadro, pág. 42)— reflejan las diferencias cualitativas en cuanto a la estabilidad del marco político y de los sistemas de partidos, el grado de consenso social, la legitimidad de la autoridad y los mecanismos mediante los cuales los gobiernos (o los que aspiran a gobernar) se aseguran y mantienen el respaldo, y la función de las instituciones estatales para sostener los mercados y distribuir o utilizar de forma equitativa los ingresos petroleros. Estas características políticas e institucionales promueven las diferencias respecto a la longitud de los horizontes políticos, los niveles de transparencia, la estabilidad y la calidad de las políticas, el poder político de los sectores que producen bienes exportables distintos del petróleo y el poder de los intereses directamente vinculados al gasto público. Examinemos cada una de estas categorías.

Democracias maduras. Los países y las unidades subnacionales encuadrados en esta categoría se distinguen por tener sistemas de partidos relativamente estables, instituciones electorales sólidas y políticas asentadas en un amplio consenso social, lo que incentiva a las autoridades a pensar en el largo plazo, dado que la reputación del partido y los resultados económicos se convierten en el eje de la pugna por el poder. Las políticas se basan, en general, en una información transparente; los derechos de propiedad están bien definidos, y los cambios de gobierno rara vez conllevan un reajuste radical de las prioridades. La burocracia es competente y relativamente independiente; el profesionalismo de los sistemas judiciales fomenta el funcionamiento despersonalizado de los mercados y una estabilidad razonable de las reglas. La competencia política por los resultados económicos significa que la inversión estatal y la provisión de bienes públicos complementan la productividad del sector privado, lo que consolida un fuerte apoyo de la ciudadanía en pro de una gestión económica prudente. En estas condiciones, la influencia de los ciudadanos puede ser un sólido contrapeso frente a los grupos de intereses que se benefician de los contratos y el gasto públicos.

Noruega, el estado de Alaska y la provincia canadiense de Alberta son casos representativos de esta categoría (véase el recuadro 2, pág. 43).

Democracias partidistas. Los países incluidos en esta categoría presentan varias características que los diferencian de las democracias maduras. La distribución del ingreso es desigual y el consenso social difícil de alcanzar. Los partidos políticos suelen ser débiles y se aglutinan en torno a líderes carismáticos; las instituciones electorales son frágiles y no es raro que se produzca una intervención militar en la política. Los gobiernos son, en general, inestables o, si no lo son, un solo partido ejerce su dominio sobre instituciones teóricamente democráticas. En ambos casos, el respaldo político se deriva del clientelismo. La política a corto plazo de lucha por el poder y por los recursos que asigna el Estado conduce a una falta de estabilidad de las políticas y de transparencia en los mecanismos de distribución de los ingresos petroleros. El rendimiento económico del gasto público suele ser escaso, dado que las estrategias obedecen a razonamientos políticos y reflejan la provisión de bienes privados a intereses particulares. Las elites burocráticas y políticas, los sindicatos del sector público y el ejército logran, a menudo, que se les asignen partidas directamente. Países como Ecuador, Venezuela y Colombia pertenecen a esta categoría.

En Venezuela, los ingresos procedentes del petróleo han moldeado la política durante décadas y han creado un estado acosado por el clientelismo y el partidismo, cuyas lealtades dependen directamente del gasto público alimentado por el dinero del petróleo. Los resultados económicos se han visto afectados por la volatilidad de los ingresos petroleros y por políticas de avance intermitente, con los consiguientes ciclos de auge y caída. A pesar de que las exportaciones de crudo de Venezuela desde los años setenta se calculan en US\$600.000 millones, aproximadamente, el ingreso real per cápita se redujo en un 15% entre 1973 y 1985, y la pobreza ha aumentado en los últimos 20 años.

Recuadro 1

¿Qué es la renta económica?

Para la mayoría de las personas, la renta es lo que se le paga mensualmente al arrendador, pero la “renta económica” es otra cosa. Es la cantidad adicional que se paga (por encima de lo que se pagaría por el mejor uso alternativo) por algo cuya oferta es limitada, bien por naturaleza o por causa del ingenio humano. Por ejemplo, una estrella del cine puede ganar el equivalente a muchas veces el sueldo de un actor menos famoso; la diferencia es la renta económica que le corresponde a la estrella. Asimismo, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) es un cártel que mantiene la oferta de crudo en niveles artificialmente bajos en comparación con el potencial de producción mundial, con lo cual aumenta el precio del petróleo. El costo adicional para los consumidores es renta económica. La búsqueda de renta económica mediante limitaciones artificiales es una actividad en auge, especialmente en las economías petroleras.

Clasificación de los países exportadores de petróleo¹

El régimen político influye en la forma en que se gasta el ingreso petrolero.

Características políticas	Consecuencias institucionales	Consecuencias económicas
Democracia madura		
Sistema estable de partidos políticos. Amplio consenso social. Burocracia sólida, competente y aislada. Sistema judicial competente y profesional. Electorado muy formado.	Horizonte de largo plazo. Estabilidad de las políticas, transparencia. Fuerte competitividad, bajos costos de transacción. Sólido sector privado /de bienes comerciables, interés por la estabilización más que por el gasto.	Ahorro probable. Racionalización del gasto, estabilización. Transferencia de ingresos al público a través de seguro y servicios sociales proporcionados por el gobierno o de transferencias directas.
Democracia partidista		
El gobierno y los partidos suelen ser inestables en relación con los grupos de intereses. Respaldo político basado en el clientelismo y el patrocinio. Profunda desigualdad social, falta de consenso. Politización de la burocracia y del sistema judicial.	Horizonte de corto plazo. Inestabilidad política, falta de transparencia, altos costos de transacción. Fuerte intervención estatal en la producción. Poderosos intereses vinculados directamente al gasto público; debilidad del sector privado no petrolero y de los intereses en pro de la estabilización.	Gran dificultad para ahorrar. Gasto procíclico; inestabilidad. Transferencia de ingresos a diversos grupos de intereses y al público por medio de subvenciones, distorsiones de las medidas de política, empleo público.
Autocracia paternalista		
Gobierno estable; legitimidad de origen tradicional, preservada mediante la distribución del ingreso. Sólidos elementos culturales de consenso, clientelismo y nacionalismo. La burocracia ofrece servicios y empleo público.	Horizonte de largo plazo. Estabilidad de las políticas, falta de transparencia. Escasa competitividad, altos costos de transacción. Fuerte intervención estatal en la producción. Poderosos intereses vinculados al gasto público. Debilidad del sector privado.	Gasto procíclico, cierto éxito con la estabilización. Riesgo de trayectoria insostenible del gasto que conduce a crisis políticas. Escasa diversificación económica.
Autocracia reformista		
Gobierno estable, legitimizado por el desarrollo. Amplio consenso social en favor del desarrollo. Apoyo en los sectores de bienes comerciables no petroleros. Tecnocracia aislada.	Horizonte de largo plazo. Estabilidad de las políticas, falta de transparencia. Búsqueda de la competitividad, bajos costos de transacción. Sólido apoyo a la estabilización y la austeridad fiscal.	Racionalización del gasto, estabilización. Inversión estatal complementaria de un sector privado competitivo. Gestión activa del tipo de cambio para limitar el síndrome holandés.
Autocracia depredadora		
Gobierno inestable, legitimado por el ejército. Ausencia de mecanismos de consenso. La burocracia acapara y distribuye los ingresos; sistema judicial corrupto. Contrapesos civiles escasos o inexistentes.	Horizonte de corto plazo. Inestabilidad de las políticas, falta de transparencia. Escasa competitividad, altos costos de transacción. Poderosos intereses a favor del gasto frente a los del sector privado o de los favorables a la estabilización.	Ausencia de ahorro. Gasto muy procíclico. Alto consumo público; las clases dirigentes absorben los ingresos por medio de prácticas de corrupción mezquineras y clientelismo: fuga de capitales.

¹Estas categorías no son exhaustivas, y algunos países presentan características propias de más de una de ellas. Por ejemplo, el federalismo fiscal es común a todas las categorías. No se trata de crear una clasificación rígida de países petroleros, sino de ayudar a hacerse una idea de las distintas opciones que, en materia de políticas, tienen los gobiernos. Véase, por ejemplo, una clasificación similar en D. Lai, 1995, "Why growth rates differ. The political economy and social capability in 21 developing countries", en *ocial apa liit and on erm conomic ro t* , Bon Ho Koo y Dwight H. Perkins, a cargo de la edición (Nueva York: St. Martin's Press).

Autocracias paternalistas. Se incluyen en esta categoría Arabia Saudita, Kuwait y algunos de los Estados más pequeños del golfo Pérsico. En principio, la legitimidad del gobierno tiene su origen en la tradición y la autoridad religiosa, pero, en el curso de la modernización impulsada por el petróleo, también se ha vinculado a la movilización de la riqueza petrolera para elevar los niveles de vida. Estos gobiernos pueden mantener su estabilidad durante mucho tiempo, buscan el consenso y sus políticas tienen un horizonte temporal mucho mayor que el de muchos gobiernos democráticos. Aunque el juego político tradicional no brinda contrapesos inmediatos a la austeridad fiscal, la visión de largo plazo de estos gobiernos indica que quizá también pueden ahorrar cuando los ingresos sean abundantes. Sin embargo, la tendencia a utilizar el gasto público para afianzar el respaldo político genera compromisos de gasto cada vez mayores, que son difíciles de recortar y limitan la inversión: subvenciones, burocracias con exceso de funcionarios y empresas protegidas e ineficientes. A la larga, estos compromisos pueden empujar a estos países a una crisis financiera.

Si bien los programas de desarrollo que los países del Golfo han puesto en marcha a lo largo de las últimas tres décadas han sido bastante exitosos desde muchos puntos de vista, sus estrategias de bienestar social han creado accidentalmente graves anomalías estructurales: una dependencia persistente del petróleo para obtener ingresos fiscales y de exportación, sectores públicos sobredimensionados, omnipresentes en la economía, que asfixian al sector privado, incentivos laborales distorsionados, y una dependencia excesiva del gobierno como empleador nacional. En la próxima década, la región soportará un aumento de la presión fiscal para ampliar los servicios públicos a causa del crecimiento demográfico, pero esta vez no se podrá recurrir al sector público para absorber el rápido incremento de trabajadores que se incorporan a la fuerza laboral.

Como consecuencia de estas tendencias resulta urgente acelerar el crecimiento del sector privado no petrolero a fin de generar oportunidades de empleo para los ciudadanos de los países del Golfo. Pero para lograr este objetivo, el gobierno tendrá que abandonar las estrategias de desarrollo de los últi-

mos 25 años y superar las importantes trabas políticas que dificultan la aplicación de estrategias sostenibles.

Autocracias depredadoras. En las autocracias depredadoras, que suelen ser menos estables que las paternalistas y las reformistas (véase más adelante), la autoridad no emana de un amplio respaldo público ni de los resultados económicos, sino más bien del poder militar y del apoyo de una elite. Estos regímenes tienden a comportarse como “bandoleros”; el poder del Estado es casi ilimitado y la explotación de los recursos públicos y privados en beneficio de la clase dirigente está arraigada en prácticas institucionalizadas. Con frecuencia, estos regímenes gozan de más continuidad que los liderados por individuos, cuyos cargos son inestables y gobiernan con horizontes de más corto plazo. Son regímenes corruptos y opacos, en los que la riqueza del petróleo casi no beneficia al conjunto de la población. Nigeria, con una sucesión de gobiernos militares, es un buen ejemplo.

Se calcula que en Nigeria el petróleo representa un 37% del PIB y un 63% de los ingresos consolidados del gobierno. Los ingresos petroleros están controlados por el sector público y, tradicionalmente, han servido para engrasar una compleja maquinaria oligopólica y de clientelismo político. El petróleo también se ha utilizado con cierto éxito para preservar una frágil coalición política de diversos intereses étnicos y religiosos. No obstante, la infraestructura económica sigue siendo subdesarrollada, y la provisión general de bienes públicos es escasa. Como cabría esperar, el gasto público desenfrenado que siempre acompaña a los períodos de auge ha creado situaciones de gran inestabilidad macroeconómica, seguidas normalmente de ajustes forzosos y dolorosos. Al tiempo que ha prosperado la clase dirigente se ha estancado el crecimiento y se calcula que el ingreso anual per cápita cayó de alrededor de US\$800 a comienzos de los años ochenta a US\$300, aproximadamente, en la actualidad.

Autocracias reformistas. Las autocracias reformistas carecen de una base democrática amplia pero, en cambio, se legitiman atacando eficazmente la pobreza mediante la inversión productiva y el crecimiento económico, lo que garantiza la formulación de políticas con un horizonte de largo plazo; así pues, las autocracias reformistas tienden a instaurar clases dirigentes autónomas, competentes y tecnócratas, que están políticamente aisladas. La falta de transparencia y de apertura del sistema político son características de los regímenes autocráticos que propician la búsqueda de renta económica, pero que, al verse obligados por su mandato político a lograr mejoras reales en el bienestar de los pobres, con frecuencia destinan los ingresos petroleros a fines productivos que fomentan el crecimiento y la diversificación de la economía. Indonesia en los primeros años de gobierno del Presidente Suharto es un ejemplo de este tipo de regímenes.

A diferencia de Nigeria, Indonesia empleó los ingresos del petróleo con fines productivos. Los tecnócratas que dirigieron la economía a comienzos de la presidencia de Suharto se concentraron en la seguridad alimentaria, la estabilización macroeconómica y la reforma del sector financiero. Los recursos se utilizaron para mejorar la infraestructura económica, mientras que las abundantes reservas de gas natural del

Recuadro 2

Noruega: Un dinero bien empleado

En comparación con otros países exportadores de petróleo, Noruega ha sabido aprovechar sus instituciones parlamentarias sumamente orientadas al consenso, así como la participación de grupos que representan intereses comerciales y laborales, para conciliar las diferentes demandas respecto a los ingresos del petróleo con los objetivos a largo plazo y las metas de estabilización. Este logro es aún más admirable si se tiene en cuenta que, desde que se convirtió en exportador de petróleo, Noruega ha tenido varios cambios de gobierno y ha pasado por períodos de débiles minorías gubernamentales. Sin embargo, al ser un país pequeño que depende del comercio, existen grupos de electores muy favorables a la estabilización —empleados, líderes sindicales y empresariales— y votantes cuyo bienestar depende de los sectores de bienes exportables no petroleros y que comprenden bien la necesidad de restringir el gasto público y evitar la volatilidad de los desembolsos. En Noruega, contrariamente a lo que ocurre en la mayoría de los otros países, las diferencias políticas son pequeñas y prevalece un sistema de valores igualitario. El alto grado de transparencia de los procesos político y burocrático reafirma la confianza general en la integridad de los políticos y en la capacidad profesional de los funcionarios públicos; pocos noruegos cuestionarían la aptitud del gobierno para gestionar los ingresos del petróleo con honradez y eficiencia. Tal vez por esta razón Noruega no ha distribuido los dividendos del petróleo directamente a sus ciudadanos, como se hizo en la más individualista Alaska.

Como reflejo de estas características, las medidas de política en Noruega son estables, a pesar de los cambios de gobierno, y su formulación es a largo plazo. Sin embargo, últimamente, el cambio de signo del presupuesto —de déficit a superávit estructurales— y la rápida acumulación de activos en el Fondo Gubernamental del Petróleo han hecho que se recrudezcan las presiones políticas para que se gaste un mayor volumen de los ingresos derivados del petróleo y han dificultado la austeridad. Además, los compromisos de gasto aumentarán en las próximas décadas —especialmente por el envejecimiento de la población y el consiguiente aumento de los pagos por pensiones— y se prevé una disminución de dichos ingresos. Estas cuestiones han creado inquietud respecto a la capacidad de Noruega para seguir administrando con éxito su riqueza petrolera.

país se encauzaron al suministro de insumos agrícolas a bajo costo para complementar la introducción de variedades de arroz de alto rendimiento. Sin embargo, el aumento de la corrupción y las posibilidades de enriquecimiento vicieron poco a poco el régimen.

¿Por qué a Indonesia (en ese período) le fue mejor que a Nigeria, tanto en términos de control fiscal y macroeconómico como de eficacia del gasto público? La respuesta está en gran medida en las diferentes economías políticas de cada país. Desde su independencia, el poder político y las

estrategias económicas en Nigeria se han definido, en su mayoría, en términos regionales y étnicos más que ocupacionales o de clase, lo que ha llevado a la búsqueda permanente de una fórmula constitucional que permita preservar la Federación Nigeriana y a una lucha constante por la asignación regional del ingreso público. La historia marcó de forma diferente el rumbo de la política de Indonesia. Suharto se centró en la estabilidad, tras el caos creado por la “democracia dirigida” del Presidente Sukarno, que disparó la inflación al 600% y provocó una escasez generalizada de alimentos. El poder político tenía una base amplia con hincapié en el consenso. La seguridad alimentaria y la estabilización de la población rural fueron las prioridades más urgentes, especialmente en Java, donde no abundan las tierras. Incluso en este marco autocrático, los sectores de bienes comerciables excluido el petróleo (la agricultura y la industria con un uso cada vez más intensivo de mano de obra) conformaron un importante grupo político directamente interesado en velar por la calidad del gasto público y en evitar la apreciación extrema del tipo de cambio real. Por lo tanto, a diferencia de Nigeria, a Indonesia le benefició el hecho de contar con agentes moderadores eficaces en los primeros tiempos de bonanza económica como consecuencia del petróleo.

Conclusiones

En las democracias maduras, la gestión de los ingresos petroleros a largo plazo se ve facilitada, obviamente, por la capacidad de consenso, la educación e información del electorado y el grado de transparencia que permite tomar decisiones claras a largo plazo sobre el uso de los recursos generados. Pero incluso en estos sistemas, sigue siendo difícil administrar el gasto con prudencia. En las autocracias reformistas y tradicionales también se pueden adoptar decisiones de largo plazo y políticas de desarrollo, pero la resistencia a la transparencia y el riesgo de que el gasto petrolero se convierta en la principal fuente de legitimidad del Estado tienden a fomentar la corrupción y entorpecer la transición política y crean problemas para los gobiernos incapaces de renunciar a los hábitos de gasto excesivo.

Poco puede esperarse de las autocracias depredadoras, que a veces planifican a corto plazo y se asemejan a las cleptocracias que se dedican a vaciar las arcas públicas. Las democracias partidistas presentan problemas especiales porque sus sistemas políticos carecen de la eficacia necesaria para consensuar intereses muy diversos que compiten entre sí. Habrá que prestar atención a la necesidad de aumentar la transparencia y concienciar a la ciudadanía.

Es improbable que un solo mecanismo aporte una solución general para fomentar la prudencia en la administración de los recursos: los gobiernos de países exportadores de petróleo tendrán que combinar diferentes enfoques. Deberán actuar con más cautela, transparencia y flexibilidad al elaborar los presupuestos; protegerse mejor; mantener un mayor volumen de reservas, y transferir parte de los ingresos del petróleo a los particulares durante las épocas de auge a fin de controlar el gasto desenfrenado y los consiguientes episodios de inmovilización y crisis fiscales durante las contracciones. Algunos paí-

ses están en condiciones de aprender de la experiencia; a otros, lamentablemente, les falta mucho camino por recorrer.

Una enseñanza clave es que los grupos que están a favor de los objetivos de más largo plazo pueden abogar por una gestión más prudente de los recursos. Entre otros, cabe señalar una sociedad civil bien informada (como la de Alaska), el Parlamento (capaz de crear un consenso eficaz que respalde un proceso presupuestario transparente, como en el caso de Noruega), los que dependen de los sectores de bienes comerciables no petroleros (la agricultura y la pesca, que encabezan las negociaciones salariales en Noruega; el sector del arroz en Indonesia, y los del estaño y el caucho en Malasia).

Asimismo, hay que procurar ampliar el horizonte temporal del debate político. La euforia del petróleo puede atenuarse si se comparan los ingresos corrientes con obligaciones a largo plazo como el valor actualizado de las jubilaciones o el servicio de la deuda: en Indonesia un importante factor de estabilización fue el pago de la deuda de Pertamina —la empresa petrolera estatal en quiebra— en 1975, cuando los precios del crudo eran altos.

Hay agentes restrictivos externos que pueden ayudar a mejorar la gestión. En el caso de los proyectos industriales de gran escala, los inversionistas privados solo pueden ayudar a frenar el gasto y compartir el riesgo si su nivel de participación es lo suficientemente importante para que las utilidades dependan más del rendimiento de la inversión que de la provisión de insumos. Las calificaciones crediticias de los gobiernos subnacionales son posibles indicadores de la eficacia de la gestión. Si no hay confianza entre los niveles federal y estatal del gobierno, los organismos internacionales podrían ayudar ofreciendo mecanismos de ahorro certificados a los países que deseen mantener sus superávits bajo control.

Las transferencias pueden ser mecanismos útiles tanto para la distribución de los ingresos petroleros como para la estabilización de la economía. Solo unos pocos países pueden implantar un sistema transparente como el de Alaska para efectuar transferencias directas mediante cheque a los ciudadanos, pero se podrían utilizar los recursos provenientes del petróleo para realizar transferencias transparentes a las comunidades o escuelas. También existen argumentos de peso para combinar tasas impositivas iniciales muy bajas, que excluyan el petróleo, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y crear una cultura de pago de impuestos a más largo plazo, con medidas encaminadas a mejorar la administración tributaria y lograr así una mayor flexibilidad fiscal y la estabilización macroeconómica.

Con independencia del enfoque que se aplique, está claro que los países que adopten una visión de largo plazo serán los que más se beneficiarán de sus recursos petroleros. ■

Benn Eifert es economista de la Universidad de Stanford. Alan Gelb y Nils Borje Tallroth son Economista Jefe y Economista Principal, respectivamente, de la región de África en el Banco Mundial. Este artículo se basa en un estudio presentado en la conferencia sobre la formulación e implementación de la política fiscal en los países productores de petróleo, organizada por el FMI, el 5 y 6 de junio de 2002.